

dellas: le reconocen la representatividad histórica de la Generalitat, pero le niegan poder para decidir qué deben y qué no deben hacer las actuales fuerzas políticas presentes en Cataluña. Pujol lo ha dicho muy claro en el transcurso del Congreso de la CDC. Sí a Tarradellas como presidente de la Generalitat. No a Tarradellas como coordinador de la política de negociación con las plataformas unitarias del conjunto del Estado español. Pujol se arriesgó bastante cuando dijo: "... reafirmamos nuestra adhesión a la Generalitat y nuestra voluntad de luchar por el regreso de su presidente, pero sin ceder ni al terrorismo intelectual ni al espíritu de ultimátum". Hubo un silencio sepulcral entre los asistentes, pero

cuando Pujol añadió: "... mantener nuestra irrenunciable fidelidad a la Generalitat no nos obliga a estar siempre de acuerdo con el presidente. Hemos estado en desacuerdo muchas veces y no siempre los equivocados hemos sido nosotros". La ovación unánime de la sala dio el visto bueno a ese "enfrentamiento de lado" que sigue siendo el pulso entre Pujol y el honorable Tarradellas.

Por su parte, los intelectuales de todo el Estado español consiguieron reunirse en Barcelona, y el Aula Magna de la Universidad, sin verse esta vez acosados por la Policía. Sobre el tema base de la libertad de culturas en las distintas nacionalidades del Estado, representantes de todos los pueblos de España

(entendían "pueblo" por país, nación, región) discutieron durante dos días, se escucharon y finalmente emitieron un previsible comunicado-manifiesto redactado en castellano, catalán, euskera y gallego, en el que se subraya la interrelación entre reivindicaciones democráticas y nacionales, la necesidad de ejercer el derecho de autodeterminación para garantizar un futuro pacífico y estable, la normalización de la vida política mediante la amnistía total y el retorno de todos los exiliados, y, finalmente, se denuncia la represión y violación constante de los derechos humanos fundamentales, "... especialmente en Euzkadi", y se hace un llamamiento a la unidad de todas las fuerzas democráticas.

Oportuno comunicado en un momento en que la sensibilidad del Gobierno ante las urgencias democráticas parece verse muy gravemente afectada por su insensibilidad ante las cuestiones de las nacionalidades. Y para muestra ahí está la ristra de torpezas tácticas que se han cometido en el País Vasco durante la última semana. En los siete días por venir, Cataluña contemplará por una parte la definitiva salida a la superficie del submarino PSUC, y por otra parte los efectos combinados de dos acontecimientos de signo opuesto: la desaparición de Pallach y la consolidación de la gran esperanza blanca: Pujol, Pujol, Pujol. ■ **M. VAZQUEZ MONTALBAN.** (Entrevista con Jordi Pujol en páginas 36-38.)

Estalla la Valencia industrial

Gobierno Civil vacante

Tras la ruptura de negociaciones en la construcción, Delegación de Trabajo dictó norma de obligado cumplimiento ofreciendo un 12 por ciento de acuerdo a las normas económicas del Gobierno, por debajo del 14,5 por 100 que ofrecía la patronal. Esta precipitó la ruptura ante una postura intransigente, posteriormente paliada con frecuentes notas publicitarias en prensa explicando lo que ofrece, y finalmente reconsiderada al desplazarse tres de sus representantes a un despacho de abogados laboristas para concertar con los obreros un nuevo diálogo al margen de cauces sindicales, sin exigir de entrada la vuelta al trabajo. Una caja de resistencia de ciento setenta mil pesetas, y una asamblea de delegados en permanente coordinación celebrando reuniones en uno de los tajos próximos a la ciudad, mantienen la continuidad de la huelga. La plataforma reivindicativa consiste en unos puntos aprobados en asambleas el 22 de diciembre: duración del convenio por un año (la patronal lo quiere por dos años), revisión semestral frente a la anual empresarial, entrada en vigor en enero, quince mensualidades de 24.000 pesetas mínimo con Seguridad Social e IRTP a cargo de la empresa, jornada de cuarenta horas, treinta días de vacaciones, no aceptar la tabla de rendimientos mínimos propuesta por la patronal por considerar que equivale a un despido libre, y otra serie de reivindicaciones sociales y laborales. Por su parte, la patronal globaliza su oferta en poco más de 300.000 pesetas, divididas en quince pagas, en las que no incluye plus de transporte y otros conceptos de la parte social.

Mientras tanto, la posibilidad de asambleas generales del sector eran duramente disueltas, hasta que la violencia de los hechos ha impuesto el sentido común en Gobierno Civil, quien el pasado sábado dio autorización a la asamblea. Durante los días del conflicto, Valencia ha estado sin gobernador civil, puesto gubernativo que quedó vacante al ir a Madrid su antiguo titular, Mariano Nicolás García, nuevo director general de Seguridad. El vacío de representación gubernamental no ha impedido que la Fuerza Pública actuase más celosamente que con anterioridad, abriéndose en un dispensario de un barrio un servicio de asistencia sanitaria gratuita por médicos y ATS de La Fe, para hacer frente no sólo a los contusionados, sino a los familiares de los trabajadores que no cobran. El nombramiento para gobernador de Manuel Pérez Olea, presidente del Sindicato de la Construcción, significaba una reacción esperada, pero tardía.

No sólo habría que medir la capacidad de reacción de la clase política, sino también de la empresarial. Las nuevas alternativas organizativas de este sector, una llamada PIMEV (Pequeña y Mediana Empresa del País Valenciano), y otra AEV (Agrupación Empresarial Valenciana), aparte de una tercera vinculada al actual consejo provincial de empresarios, no han podido situarse a la altura de las condiciones creadas. Todo lo más, AEV señalaba "que parte de estas huelgas no tienen suficiente justificación laboral, sino que están caracterizadas por un alto grado de politización... decimos rotundamente 'no' a la transformación de la empresa en un simple escenario de actuaciones políticas de grupo", para añadir que no acepta el sindicalismo incorrecto de aquellos dirigen-

tes que realizan una política destructiva en lugar de buscar unas mejores condiciones de trabajo, finalizando con una defensa de la huelga como instrumento razonable de justas reivindicaciones laborales. "La democracia ha de proveer lugares y sistemas idóneos para ejercer las diversas opciones políticas. Pero entre esos lugares no deben figurar las fábricas, los talleres".

El "gran metal"

En el metal, la situación se ha encauzado con la decisión de prorrogar por un año el actual convenio. Las pequeñas empresas constituyen las tres cuartas partes de su censo. Sin embargo, la significación en la economía regional y nacional de las empresas Ford, Altos Hornos del Mediterráneo, Macosa, Unión Naval de Levante y Astilleros Españoles, S. A., antigua Elcano, multiplican y amplifican enormemente sus conflictos. En la factoría Ford (con unas pérdidas diarias de venta, por día de paro, de noventa millones de pesetas) la política laboral multinacional esquivó los conflictos, aunque mantiene a raya el principio de "quien no trabaja, no cobra", como insistentemente manifestó a TRIUNFO su jefe de relaciones laborales, José Luis Muñoz, antiguo delegado de Trabajo e inspector de Trabajo en excedencia. Frente a la huelga obrera, la empresa aplica la suspensión de empleo y sueldo sin efectuar despidos por el momento. Su plantilla (aproximadamente 7.000 trabajadores), todavía tiene un dilema que el informador no ha podido clarificar: las 7.000 pesetas de aumento lineal, ¿fue una demanda laboral o una oferta empresarial? Para los huelguistas fue lo

segundo, y ante la negativa que la parte económica expresó a la social en las deliberaciones, tras viajar Londres, fue cuando saltó violentamente el conflicto y se está a la espera del laudo. En medios laborales no sólo se señala a la central de Ford Europa como razón de la negativa, sino también la presión de otras empresas del gran metal valenciano, que siempre han visto en Ford una competitividad peligrosa en el mercado laboral.

Los convenios de empresa en las cuatro grandes restantes han tenido un desigual desarrollo. Mientras Altos Hornos del Mediterráneo lo tiene firmado y Macosa está en vías, Elcano y Unión Naval de Levante han visto cerradas las puertas de sus respectivas naves. En Astilleros Españoles de la sociedad, mientras en Unión Naval las negociaciones han sido pospuestas por supuesta crisis económica, máxima cuando está pendiente de resolución su expediente de reducción de plantilla.

El conflicto saltó a la calle, tanto en las asambleas dispersadas por la Fuerza Pública, como en la manifestación del viernes por la tarde, donde las barricadas de coches y la nueva técnica de dirigir y coordinar las manifestaciones con moto estuvieron a la orden del día. El contingente policial se multiplicó por dos y por tres a lo habitual en la capital, que estuvo durante varias horas en su zona céntrica y vías de circunvalación ocupada por manifestantes y policías. La disolución de la asamblea de la Ford en la estación de Silla, el martes, también creó situaciones tensas que originaron el corte de la circulación en dos carreteras nacionales. Una vez más, las reuniones masivas para replantear los conflictos no tienen cauces ni normativa adecuada. ■ **JAIME MILLAS.**